

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valdivia  
CAUSA ROL : C-1043-2023  
CARATULADO : NEICUL/FISCO DE CHILE - EJERCITO

Valdivia, a veinticinco de noviembre del año dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

Al folio 1, don Mauricio Obreque Pardo, abogado, domiciliado en calle Aníbal Pinto 1999, de la comuna de Valdivia, en representación, según mandato judicial que se acompaña de **Angela Ñancucheo Ancapichun**, casada, chilena, nacida el 08 de marzo de 1948, C.I. N° 6.210.804-5, por sí, y en representación de sus dos hijos discapacitados, **Carlos Orlando Neicul Ñancucheo**, chileno, soltero, C.I. N° 10.442.576-3 y **Elisa Margot Neicul Ñancucheo**, chilena, soltera, C.I. N° 12.340.928-0; doña **Ana Patricia Neicul Ñancucheo**, chilena, soltera, C.I. N° 11.308.498-7 y **Marisa Dorama Neicul Ñancucheo**, chilena, soltera, profesora, C.I. N° 11.710.332-3, todos domiciliados en pasaje Calera de Tango N° 1498, Osorno, deducen demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de Derecho Público, representado por don Natalio Vodanovic Schnacke, abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, por lo argumentos de hecho y derecho que expone:

1.- Según consta en Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocido como Informe Rettig, en su Volumen I, Tomo 1, página 400[1] y según se acreditó en los autos rol 1.673-2003 de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, y que actualmente se encuentra ejecutoriada, el cónyuge y padre de mis representados, don José Ligorio Neicul Paisil, el día 16 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio por un grupo de alrededor de 30 efectivos de Carabineros que se movilizaban en una camioneta de la CORA (Corporación de Reforma Agraria), un furgón del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) y otros vehículos particulares. En los hechos descritos, los carabineros se presentaron en la vivienda del afectado preguntando por José Neicul Paisil, y al responder su mujer, doña Ángela Ñancucheo Ancapichún, que efectivamente éste se encontraba allí, entraron los funcionarios



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTSLH

violentamente a la casa y sacaron a José Neicul a empujones hacia el camino, obligándolo a poner los brazos detrás de la cabeza.

Posteriormente entraron otros tres uniformados a la vivienda y procedieron a allanarla, según dijeron, en busca de armas. Los agentes del Estado sacaron de su casa a José Neicul y lo subieron a una camioneta. Junto a Neicul fueron detenidas dos personas más. Los carabineros se los llevaron a todos, y nunca más aparecieron, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy, teniendo hasta la fecha, la calidad de detenidos desaparecidos.

Al momento de su detención, don José Ligorio Neicul Paisil, tenía 45 años de edad, estaba casado, tenía 4 hijos, se desempeñaba como obrero agrícola, había sido Regidor de la Comuna de Entre Lagos, y era militante comunista y dirigente deportivo.

2.- En los autos criminales rol 1673-2003 en el Número II, considerandos 14 y siguientes, en la sentencia definitiva, se logró acreditar la participación criminal en calidad de autores del secuestro calificado de don José Ligorio Neicul Paisil, de los ex funcionarios de Carabineros de Chile Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres, Germán García, Abelardo Rojas Zúñiga, Armando Rubén Angulo Fuchslocher, y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, quienes fueron condenados por los hechos reseñados.

3.- De los antecedentes expuestos se concluye que el padre y cónyuge de los demandantes fue detenido y hecho desaparecer por los agentes del Estado, ya individualizados quienes como ya se indicó fueron sometidos a condena criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada y en etapa de cumplimiento.

4.- Una vez producida la detención y ejecución de don José Ligorio Neicul Paisil, su grupo familiar, su cónyuge y sus hijos, todos demandantes de autos, procuraron por sus propios medios encontrarlo, sin éxito, y más adelante hacer justicia por este crimen, siendo permanentemente rechazados por los organismos estatales, debiendo recurrir finalmente al apoyo de la Iglesia Católica y de otros familiares que estaban sufriendo una situación similar, con quienes dieron forma a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno.



5.- Por lo expuesto y desde el 16 de septiembre de 1973, el grupo familiar del demandante y sus hijos a quien represento, nunca han cesado sus esfuerzos para dar primero con el paradero de su padre detenido desaparecido y hacer justicia frente al crimen del que han sido víctimas, situación que los ha marcado y determinado su vida, generando en ellos una permanente sensación de vacío y dolor ya que el duelo se ha tornado en ellos en un estado permanente.

6.- Específicamente para describir lo vivido por mis representados, me limitaré a reproducir un relato individual que me hicieron llegar en forma previa a la elaboración de esta demanda:

7.- En consecuencia, la pérdida del padre y cónyuge de los demandantes, produjo un agudo e imborrable daño al grupo familiar de mis representados generando en ellos pobreza, marginalidad y un duelo interminable dado que nunca han dado con el paradero de su padre, detenido desaparecido, todo lo cual marcó el futuro de la familia, generando en ella, graves perjuicios psicológicos y emocionales, y le generaron a los demandantes, innumerables traumas y sufrimientos irreversibles, todo lo cual es constitutivo de un agudo daño moral que deben ser reparados y compensados.

#### El Derecho:

1.- En la Corte de Apelaciones de Valdivia, se llevó el proceso penal por el homicidio calificado don José Ligorio Neicul Paisil, padre y cónyuge de los demandantes y de otros tantos ejecutados políticos, proceso criminal que llevó el rol N° 1673-2003, también llamado caso Rahue. En tal proceso se condenó como autores de homicidio calificado a los ex funcionarios de carabineros de Chile, entre ellos, Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres, Germán García, Abelardo Rojas Zúñiga, Armando Rubén Angulo Fuchslocher, y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, lo que consta a fojas 10.872 y 10.873 de autos, en causa criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada.

2.- En relación con los hechos expuestos, el 25 de abril de 1990 se publicó en el Diario Oficial el DS N° 355 de justicia, por el cual se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, entidad a la cual el estado mandata “...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

violaciones a los derechos humanos... sean en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el estado de Chile”, agregando más adelante que para estos efectos “se entenderá por graves violaciones, las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del estado, por actos de sus agentes o de personas a su servicio...”.

3.- Concluida la labor investigativa de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se elabora un informe dirigido al presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, conocido como Informe Rettig, en alusión al presidente de la entidad. Dicho documento, en su Tomo I, página 412, analizan el caso que nos ocupa, considerándolo como un hecho de violación grave de los derechos humanos en los términos del inciso 2º del artículo 1º del D.S. Nº 355 de 1990.

4.- En relación con lo expuesto, la Constitución Política de la República, en su artículo 38 inciso segundo establece que “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

5.- Por su parte la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 4º establece que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicios de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

6.- Encontrándose acreditado por sentencia dictada en los autos Rol 1673-2003 que los señores Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, fueron condenados por delitos de lesa humanidad, lo que consta a fojas 10.872 y 10.873 de autos, en causa criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada, por el secuestro calificado de don José Ligorio Neicul Paisil, padre y cónyuge de mis representados, surge de manera inequívoca la responsabilidad civil del Estado, atendida la comisión de estos delitos en el ejercicio y con ocasión de sus funciones públicas.



7.- Por lo expuesto es que en virtud de lo establecido en las normas ya citadas y en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, y en especial del 2320 del mismo cuerpo legal, en cuya virtud demando la responsabilidad civil del Estado de Chile por los homicidios de los familiares de los actores.

8.- En cuanto al ejercicio de esta acción judicial, ésta resulta oportuna, no obstante haber transcurrido más de 49 años desde el día de los homicidios, por cuanto en los hechos nos encontramos frente a un delito de carácter imprescriptible e inamistiable.

9.- En efecto, la oportunidad del ejercicio de esta acción civil, se sustenta además en que el secuestro calificado de estos autos, no reviste el carácter de un delito común, sino que el carácter de crimen contra la humanidad, por cuanto y sin perjuicio de las disposiciones precedentemente citadas, constituyen una infracción a lo establecido en los Convenios de Ginebra Sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Guerra y a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra publicados en Diario Oficial el 18 de abril de 1951 y el 12 de agosto de 1950 respectivamente, específicamente a lo estipulado en el artículo 3° de ambos cuerpos normativos, en cuya virtud “En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1.- Las Personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, detención o cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto queda prohibido, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas:

a.- los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles. Torturas y suplicios;



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

b.- la toma de rehenes:

c.- los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d.- las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provistos de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

10.- La aplicación de los convenios de Ginebra, a estos casos obedece a múltiples actuaciones y manifestaciones tanto expresas como tácitas de la Junta Nacional Gobierno, altos mandos militares de la época y personeros civiles de dicho régimen de ipso, quienes se encuentran contestes en que entre septiembre de 1973 y 1976 existía en Chile una situación de guerra interna, a partir de la declaración del Estado de sitio como medida de excepción constitucional a lo largo del territorio nacional que supuso la introducción de procedimientos penales de tiempos de guerra regulados por el título III del Libro Primero, artículos 71 y siguientes del Código de Justicia Militar, situación que se ve refrendada por carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1974 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citada por el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III página 168, donde señala que “..En relación a los delitos sometidos a la jurisdicción militar, no procede el recurso de habeas hábeas, como consecuencia de hallarse el país en estado de sitio, el que, en conformidad al Decreto Ley N° 5, equivale a estado o tiempo de guerra...”.-

11.- Por lo indicado, el secuestro y desaparición de José Ligorio Neicul Paisil, objeto de esta demanda constituyen infracciones graves a los citados convenios de Ginebra y por lo mismo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, situación de enorme relevancia, por cuanto su persecución y castigo se funda en principios de derecho internacional general que forman parte del derecho internacional positivo según señala el profesor Santiago Benadava en su trabajo Derecho Internacional Público, (Editorial Jurídica, pagina 212).

El ya citado principio tiene su origen en los juicios de Nuremberg y de Tokio instruidos para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, así el contenido de las cartas de estos tribunales y las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

sentencias que de ellos emanaron, principios que fueron recogidas y reafirmados por la Asamblea General de la O.N.U.

En efecto, la ya indicada Asamblea General aprobó en 1968 una convención sobre sanciones de los crímenes de contra la humanidad, declarando que es irrelevante para el orden internacional que exista una legislación en contrario; por otro lado, en 1968 se suscribe convención que establece imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad, ratificada el año 1973 por la Resolución N° 3074 de la misma entidad, disposiciones todas vinculantes para Chile atendido su carácter de integrante de la Organización de las Naciones Unidas.

12.- Según señala el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III, página 36, son crímenes de guerra”...las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que incluyen.... el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra...”, como ocurren en los casos que nos ocupan.

13.- La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes tiene en cuenta además el especial contexto histórico en que se cometieron, toda vez que fueron ejecutados por agentes de un régimen de facto, que tal como se ha demostrado en reiteradas causas sobre violaciones a los derechos humanos ventiladas ante los tribunales de la República, donde se practicó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con lo que la sensación de impunidad y temor existente en la población de la zona y el país constituía una realidad que se debe tener presente al fallar esta causa.

14.- En relación con lo antes indicado, los Estados Americanos, entre ellos el nuestro, al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y asumir entre otros, los deberes que le impone su artículo N° 1, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contraído la obligación general de proteger, respetar y garantizar cada uno de los derechos del pacto con lo que “ el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificador.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

víctima una adecuada reparación...” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988).

15.- Una eventual declaración de prescripción de la acción civil en autos, no resultaría acorde con el deber asumido por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, no solo a partir de lo establecido en la disposición señalada en el número anterior, sino que en los ya citados convenios de Ginebra, en su artículo 148 señala que “

Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra parte contratante, respecto a las infracciones previstas en el artículo anterior....” (Infracciones graves como la señalada en el artículo 3º del Convenio).

16.- En relación con lo expuesto, los tribunales superiores de justicia desde los años 2005 y 2006 han dictado diversos fallos que se inclinan por la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como el que nos ocupa en esta demanda, es así como en relación con los homicidios de Hugo Rivol Vásquez Martínez, Mario Superby Jeldres y José Matías Ñanco, en las causas rol 559-04 y 266-04 de la Exma. Corte Suprema se ha señalado que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra deriva de principios de derecho internacional general que desde la década de los 70 son parte de nuestro ordenamiento jurídico.

17.- Según consta en sentencia dictada en autos criminales donde se investigaron y sancionaron estos hechos, la detención y secuestro de José Ligorio Neicul Paisil ocurrió en el domicilio de la propia víctima, domicilio que ésta compartía con su cónyuge, hijo e hijas, situación que por lo mismo ha generado en cada uno de nuestros representados profundas y perturbadoras huellas, que los han marcado de por vida.

Enfrentándose a condiciones sumamente precarias, tanto en el plano económico, como en el plano emocional.

18.- En cuanto al daño moral, entendido éste como el dolor o sufrimiento generado en la demandante a partir del secuestro calificado de su hermano, resultan enormes, por cuanto está presente en su vida el vacío provocado a partir del crimen cometido por los funcionarios de carabineros de Chile, Adrián Fernández Hernández, don Rolando Becker Soliz, Rafael



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

Pérez Torres y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, todos agentes públicos que actuaron en el ejercicio de sus funciones, por lo cual actuaban bajo dependencia del Fisco de Chile, demandado en estos autos. El daño emocional es enorme, la violencia de las circunstancias en que se produjo el asesinato de su familiar está marcada en su memoria, circunstancias todas que serán suficientemente acreditadas en estos autos.

19.- Frente a este punto debemos agregar que, respecto del daño moral, nuestra jurisprudencia ha sostenido que: “a diferencia de lo que ocurre en materia patrimonial, el daño moral no necesita ser acreditado, por lo cual, demostrada la trasgresión del derecho subjetivo, debe tenerse por probada la existencia misma del daño moral”.

20.- Respecto de la prueba del daño moral, Carmen Domínguez señala que: “con ello aludimos a las verdaderas presunciones de Derecho de daño moral que nuestros Tribunales han reiteradamente reconocido con ocasión del perjuicio infligido por la muerte o lesiones de la víctima a aquellas personas con las que se encontraba o encuentra ligada afectivamente y en las que ni siquiera exigen prueba del parentesco o vínculo afectivo invocado. Como se ha sostenido, “aunque no haya prueba directa sobre el daño moral sufrido por el hermano de una persona asesinada, se deduce de este parentesco”.

21.- “El daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre por un hecho externo que afecta la integridad física y moral del individuo. Por lo tanto, la apreciación pecuniaria de ese daño debe considerarse por entero sometida a la estimación discrecional del juez, ya que dada su índole es incurso que no puede ni requiere ser acreditada”.

22.- “El daño moral por el carácter espiritual que reviste no debe ser fundamentado ni probado, correspondiéndole al juez apreciarlos prudencialmente de acuerdo al mérito del proceso y a las reglas de equidad”.

23.- “Nuestros tribunales han establecido una nítida diferencia entre los perjuicios patrimoniales o no patrimoniales, pues mientras respecto de los primeros se exige una acreditación completa y exigente, en cuanto a los



segundos ella es preferida al entenderse que, dada su naturaleza, la prueba es imposible”.

24.- Señala los criterios y factores a considerar para la evaluación del daño moral.

25.- Acreditada la existencia de la detención, secuestro y desaparición de la víctima, padre y cónyuge de los demandantes, y la participación en ellos en calidad de autores de agentes públicos dependientes del Fisco de Chile, acreditada además la existencia de daños patrimoniales y morales que han recaído sobre los demandantes, es necesario referirnos a la existencia de una relación de causalidad entre la detención, secuestro y desaparición de José Ligorio Neicul Paisil y los perjuicios alegados sobre los demandantes. En este sentido la doctrina administrativista se ha pronunciado a favor de la teoría de la causa adecuada, en cuya virtud, “no todas las condiciones necesarias para producir un resultado son equivalentes, sino que la causa adecuada es aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producirlo”.

26.- En estos autos se acreditará la existencia de esta relación de causalidad y del hecho evidente que la única causa basal de todos los perjuicios que afectan a nuestro representado radica en el secuestro calificado de su familiar, como se ha expresado anteriormente.

Por estas consideraciones y disposiciones legales que cita pide tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y en definitiva condenarlo al pago, por concepto de daño moral a:

1.- Angela Ñancucheo Ancapichun, por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

2.- Carlos Orlando Neicul Ñancucheo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

3.- Elisa Margot Neicul Ñancucheo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

4.- Ana Patricia Neicul Ñancucheo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

5.- Marisa Dorama Neicul Ñancucheo, por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

O en su caso, las sumas que respecto de las demandantes y de acuerdo con el mérito del proceso, determine SS., con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda, y hasta el efectivo pago de las mismas, con costas.

Al folio 8, con fecha 22 de noviembre de 2023, se notificó al Abogado Procurador Fiscal en representación del Fisco de Chile.

Al folio 12, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo en virtud de los siguientes antecedentes:

#### I.- RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA.

Su parte no discute que don José Ligorio Neicul Paisil fue detenido y hecho desaparecer hasta el día de hoy, por acción de agentes del Estado, y que en dicha condición forme parte del listado de víctimas de que da cuenta el Informe Rettig.

Sin embargo, más allá de su inclusión en el referido informe, y en tanto no se nos presente la certificación oficial con el relato aceptado por la comisión que concuerde con lo sostenido en el libelo, esta parte no está en condiciones de aceptar que los hechos descritos en la demanda para fundar los daños cuyas indemnizaciones se reclaman, hayan ocurrido de la manera que los narran los actores, ni tampoco puede esta parte reconocer la extensión y alcance de dichos hechos.

En consecuencia, los demandantes a lo menos deberá demostrar las particulares circunstancias que se relatan en la demanda.

#### II- EXCEPCIÓN DE PAGO. IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN ALEGADA.

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas. No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior —y desde— lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

La complejidad reparatoria. Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Asumida esta idea preparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTSLH

que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DDHH no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de la Ley 19.123.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

### III.- EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de la excepción de reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos; y a todo evento con relación de aquellos actores respecto de los cuales no se acreditaren satisfacciones del tipo de las antes señaladas.

Normas de prescripción aplicables.

Opone la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según relato y antecedentes de la demanda, la detención, ejecución y/o desaparecimiento a que se refiere se produjeron en septiembre de 1973.

Es del caso SS., que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

En subsidio, en caso que SS., estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que controvierto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

#### Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

#### Fundamento de la prescripción

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

#### IV.- EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

##### 1.- Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactoria.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

2.- Baremos. También es pertinente hacer presente a SS., que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

#### V.- PAGO DE REAJUSTES E INTERESES.

Además de lo alegado, hago presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Cabe mencionar lo anterior, pues el actor solicita el pago de reajustes e intereses desde la notificación de la demanda.

Pues, bien a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por lo señalado pide tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Al folio 14, el demandante evacuó el trámite de la réplica en rebeldía.

Al folio 16, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Al folio 22, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A fojas 41, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a fin de evitar repeticiones, se dan por reproducidos los escritos fundamentales de demanda y de contestación, así como la parte petitoria de los mismos.

**I.- En cuanto a la excepción perentoria de pago por las reparaciones o compensaciones otorgadas.**

**SEGUNDO:** Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol N° 13.699-15), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la *reparación íntegra* en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de ese hecho. Estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales nacionales en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

**TERCERO:** Que, en efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los *Derechos Humanos*, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

**CUARTO:** Como se dirá en lo resolutivo, se rechazará la *excepción de pago o de reparación* alegada como excepción principal fundada en que la actora ya fue indemnizada o compensada con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación de la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, y en virtud de la Ley N° 19.980, por las siguientes razones:

a) No existe incompatibilidad entre los beneficios otorgados y la indemnización de perjuicios establecidos en sede judicial. No existe motivo alguno que permita inferir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar el daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. Los medios voluntarios y de política y naturaleza asistencial desarrollada por el Estado de Chile no implican una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a una sede jurisdiccional para que ésta, por los medios que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral (SCS rol N° 9.755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 15.298-18 de 19 de diciembre de 2018 y Rol N° 15.402-18, de 21 de febrero de 2019, entre otras).

b) El derecho a la *reparación íntegra* de las víctimas y familiares encuentra su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales le obligan a reconocer y proteger dicho derecho en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del art. 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política. Al respecto, véanse, SCS rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015; rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015; rol N° 15.402-18, de 21 de febrero de 2019 y Rol N° 29.448-18 de 27 de agosto de 2019, entre otras).

c) La tesitura del Fisco de Chile al hacer valer una presunta incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial contradice la normativa internacional antes señalada y porque el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.

En efecto, la normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, como se dijo antes, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

**II.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva de la acción.**

**QUINTO:** La *excepción perentoria de prescripción extintiva* será rechazada por cuanto las normas del Derecho interno previstas en el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por el Estado de Chile y que, sin perjuicio de la data de su establecimiento y reconocimiento interno, corresponden a normas de *ius cogens*, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional (en este sentido, véanse, entre otras, SCS rol N° 8318-18, de 26 de septiembre de 2018, rol N° 29.944-18, de 26 de marzo de 2019; rol N° 29.617-19, de 19 de marzo de 2020; y rol N° 91.583-2010, de 4 de octubre de 2024).

En consecuencia, no resultan aplicables las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el Fisco demandado, pues ellas contradicen, como se dijo, la normativa internacional.

Así las cosas, se rechazará la excepción de prescripción extintiva, alegada de forma subsidiaria por la demandada, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

**SEXTO:** Para acreditar los fundamentos de su acción, el demandante rindió prueba documental, legalmente acompañada y no tachada, consistente en:

1.- Mandato Judicial, otorgado por doña Angela Ñancucheo Ancapichun, por sí, y en representación de sus hijos discapacitados Carlos Orlando Neicul Ñancucheo y Elisa Margot Neicul Ñancucheo, otorgado ante el notario titular de Osorno, don Abdallah Fernandez Atuez, y anotada en su repertorio bajo el número 78-2023.

2- Mandato Judicial, otorgado por doña Ana Patricia Neicul Ñancucheo, y Marisa Dorama Neicul Ñancucheo, otorgado ante el notario titular de Osorno, don Abdallah Fernandez Atuez, y anotada en su repertorio bajo el número 76-2023.

3.- Certificados de nacimiento de don José Ligorio Neicul Paisil, Doña Angela Ñancucheo Ancapichun, Ana Patricia Neicul Ñancucheo, y Marisa Dorama Neicul Ñancucheo.

4.- Certificados de nacimiento, y copia de cédulas de identidad y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

certificados de discapacidad de Carlos Orlando Neicul Ñancucheo, Elisa Margot Neicul Ñancucheo.

5.- Certificado de Matrimonio entre don José Ligorio Neicul Paisil y doña Angela Ñancucheo Ancapichun.

6.- Copia de sentencia definitiva dictada en autos criminales causa rol 1673-2003 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia con citación.

7.- Copia digitalizada Informe Comisión Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, página 400, ubicado en la página web del Instituto de Derechos Humanos, con citación.

8.- Informe Prais Marisa Neicul Ñancucheo

9.- Informe Prais Carlos Neicul Ñancucheo

10.- Informe Prais Elisa Neicul Ñancucheo

11.- Informe Prais Angela Ñancucheo Ancapichun

12.- Informe Prais Ana Neicul Ñancucheo

Al folio 37, rindió prueba testimonial. Con los dichos de los testigos Inés del Carmen Barría Basay y Ruth María Pérez Purrai, quienes legalmente examinadas y no tachadas declaran:

Barría: Al punto uno de la interlocutoria de prueba: Si es efectivo, bueno en el momento de la detención del Esposo y padre de los demandantes. Ellos tuvieron que vivir en mucha precariedad ya que, de vivir en una casa normal o cómoda, después de la detención de Don José Ligorio Neicul debieron dejar esa vivienda e irse a vivir a una casa mu y pequeña era una mediagua con piso de tierra su Sra. tuvo que vivir así con sus cuatro hijos. La detención fue le día 16 de septiembre del año 1973 por funcionarios de carabineros de Chile en un número de treinta que lo detuvieron en forma violenta, asustando a los pobladores que eran campesinos golpeándolos y torturándolos. Desde ese momento nunca más se supo de don José Ligorio. Como era una casa patronal en donde ellos vivían debieron dejarla y tuvieron que irse a vivir en una mediagua. A raíz de todas estas necesidades de no tener un padre que mantuviera a la familia comenzaron a vivir muchas precariedades y el hijo mayor de esta familia que cursaba segundo o tercero básico no pudo continuar sus estudios y hasta los días de hoy y por no tener un padre que lo cuidara, quedo traumatizado e pegado en esa edad siendo hasta hoy una persona limitada



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

en su salud física y mental estando postrado hasta hoy. Su hija de nueve meses a la fecha de la detención del padre nunca pudo desarrollarse en forma normal y también al igual que su hermano esta postrada además nunca pudieron pagar un tratamiento adecuado. La fuerza de estas mujeres que quedaron desamparadas por la desaparición de su marido, logro en parte sacar adelante a dos de sus cuatro hijos, doña Ángela Ñancucheo, viviendo toda la discriminación de todas las instancias desde el colegio a sus carreras logro educar a sus dos hijas Ana Patricia, y a Maritza. Y ellas han apoyado a su madre en parte para poder sobrellevar la carga de sus otros dos hermanos. El mayor daño es que dos de los hijos quedaron con secuelas tan graves que hoy son minusválidos, fueron discriminados por el resto de la sociedad quedando marcados para el resto de la vida. Y que los siguen afectado, ya que nunca más se supo, siendo un detenido desaparecido, ellos crecieron sin un padre, y hoy no tienen ni siquiera una tumba donde dejarle una flor.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba: Si por supuesto que tiene fundamentos legales ya que al momento de la detención hechas las denuncias nunca se investigó, y las razones eran por eran uniformados los que estaban involucrados, y estos casos se iban la Justicia militar y ahí se quedaron y nunca se investigaron. Por esto esta familia quedo en más completo desamparo, viviendo mucha precariedad de todo ámbito, salud, alimentación vivienda, la falta de un padre, debiendo los hijos de tomar responsabilidades desde muy pequeños los hijos, debiendo entrar a la vida laboral cuando aún eran niños, ya que debían levantarse a las cuatro de la mañana junto a su madre a lechar para poder ganarse el sustento diario.

Preguntada para que diga, si sabe quién asumió los cuidados de los hijos enfermos en ausencia del padre. Responde: la madre doña Ángela Ñancucheo, apoyada por sus hijas que eran menores de edad, porque ella salía a buscar a su marido, desaparecido.

Preguntada para que diga si sabe, como afectó en su calidad de vida el asumir los cuidados de los hijos en ausencia del padre. Responde: Si existió un cambio del cielo a la tierra, ya que, de tener una vida feliz y normal apoyada económicamente por su marido, quedando después de la detención y desaparición, quedo desamparada con sus cuatro hijos, sin casa



debiendo buscar como alimentarlos debió conseguir cualquier empleo, y además tener que buscar al esposo desaparecido.

Preguntada para que diga si, sabe si la desaparición del Sr. Neicul causa sufrimiento en su familia al día de hoy. Responde: Si el sufrimiento de levantarse cada día de ver a sus hijos postrados, no tener el apoyo de un esposo y padre para sus hijos, y nunca haber sabido de su paradero, es un sufrimiento que a diario debe vivir, ya que no tienen un lugar para dejarle una flor.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba: Bueno don Ligorio era dirigente social y militante político, y autoridad ya que era regidor de la comuna de Entre Lagos, todo esto hizo que fuera una presa fácil para sus captores, y para los momentos que sufrían los perseguidos. Por cuanto el daño fue causado por funcionarios del Estado de Chile que lo detuvieron lo torturaron e hicieron desaparecer. Sobre los montos creo que debía ser el máximo que otorga la ley para reparar los daños causados. La tranquilidad de esta familia sería también encontrar el cuerpo de su padre.

Pérez: al punto uno de la interlocutoria de prueba: si, por el hecho de haber sido detenido a su padre los hijos y la madre sufrieron un daño Psicológico y también físico irreparable, Yo sé que Ligorio lo llevaron detenido el día 16 de septiembre del año 1973, en el sector el Encanto Puyehue los carabineros lo sacaron de su casa agresivamente con golpes en presencia de su Sra. y sus niños, muy chicos en esa época. Esto lo sé y me consta porque yo vivía en el sector porque era vecina, sentí los disparos que hicieron los carabineros que en un numero de treinta no paraban de disparar yo no lo vi, pero sentí los disparos. Eso fue en la tarde.

La familia quedo afectada en su salud, yo en esa época era niña también y jugaba con ellos en la Escuela y al tiempo los vi postrados al hijo mayor Carlos y la hija Menor Eliza, estos no pudieron sobrellevar el trauma y se fueron enfermado. La familia vivió todo tipo de necesidades económicas y sufrieron Bulling en la escuela por lo que fue muy difícil terminar sus estudios. Su Sra. físicamente se envejeció prematuramente, el sacrificio de criar sola a cuatro hijos el deterioro física y mentalmente sufrió mucho.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba: Por el daño causado, de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

quedar vulnerable ante la vida, por el daño causado, y el sufrimiento tan grande que le causo carabineros, y el Estado. Es que el Estado debe hacerse cargo de reparar el daño. Y me remito a lo declarado en el punto anterior.

Preguntada para que diga si sabe la testigo, si los demandantes siguen buscando el cuerpo del Sr. Neicul hasta los días de hoy. Responde: si yo tengo entendido que, si por que necesitan cerrar una etapa de su vida, es lo que me cuentan las hijas y la madre.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba: lo máximo que la ley indique u otorga para este caso, porque el daño que le causaron por quedar sin un padre y un marido y vulnerables para toda la vida el daño Psicológico y físico, todo justifica esta demanda.

**SÉPTIMO:** Por su parte, la demandada no rindió prueba.

**OCTAVO:** Que la prueba documental rendida, en especial, los informes practicados por profesionales del programa Prais, arriban a los siguientes diagnósticos y conclusiones:

Angela Ñancucheo Ancapichun: “[...] Desde el punto de vista psicológico, es importante señalar que la Doña Ange la muestra consecuencias emociona les ligadas al impacto que generan en ella, la detención y desaparición forzada de su esposo. Debido a esto puede colegirse que mantiene un proceso de duelo suspendido (duelo patológico) a causa de no haber podido encontrar nunca los restos de su esposo, lo que trae consigo el desarrollo de sentimientos de frustración, angustia y desamparo, generando una base traumática hasta el día de hoy. [...] Desde el punto de vista médico, se advierte un cuadro clínico de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), se evidencian síntomas de hipervigilancia y reactividad, sintomatología ansiosa ocasional; sin insomnio, pero con síntomas de reviviscencia. [...] Finalmente, es necesario señalar que producto de los descritos doña Angela presenta hisporia y síntomas indicativos de TEPT y de duelo patológico, de curso crónico, lo que hasta la fecha carece de reparación del daño causado.”

Carlos Orlando Neicul Ñancucheo: “[...]Carlos, quien presencié el secuestro violento de su padre a la edad de siete años, fue sometido a un entorno de constante hostilidad y discriminación. Este hecho no solo alteró su desarrollo normal, sino que también lo sumergió en un estado de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

*"orfandad suspendida" (Basile, 2016), caracterizado por la incertidumbre y el dolor irreparable de la ausencia paterna. La discriminación y violencia que sufrió en la escuela y su comunidad, al ser etiquetado como el "hijo de un comunista ", agravaron su situación de vulnerabilidad, lo que lo llevó a desarrollar conductas de aislamiento y evitación. Desde un punto de vista psiquiátrico, Carlos presenta síntomas que se alinean con un Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C). Este diagnóstico no solo engloba los síntomas característicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), como la reexperimentación del trauma, la evitación de estímulos relacionados con el evento traumático, la hipervigilancia y la alteración del estado de ánimo, sino que también incluye problemas adicionales asociados con traumas prolongados y repetidos. En el caso de Carlos, el TEPT-C se manifiesta a través de dificultades significativas en la regulación emocional, la alteración en la percepción de sí mismo, problemas interpersonales graves y una sensación persistente de desesperanza y desesperación. [...]En el caso de Carlos, el TEPT-C se agrava por la coexistencia de su discapacidad intelectual, que limita su capacidad de procesar y dar sentido a las experiencias traumáticas. Su dependencia severa en las actividades de la vida diaria y la ausencia de recursos cognitivos adecuados lo han dejado atrapado en un ciclo de reexperimentación traumática, donde la evitación y la incapacidad de formar vínculos sociales significativos refuerzan su estado de vulnerabilidad."*

Elisa Margot Neicul Ñancucheo: "[...]1. En el ámbito psicológico, se puede inferir que Elisa también se encuentra viviendo un duelo suspendido en el tiempo que la lleva a mantener una mezcla de dolor, trauma y afectación de los vínculos afectivos, dado que aún no aparecen los restos de su padre. [...]4. La falta de justicia e impunidad, hacen que permanezca un sentimiento de frustración y rencor por la injusticia, a la cual como familia han sido sometidos. Finalmente, es necesario señalar que producto de los eventos descritos el paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT, de curso crónico, lo que en términos específicos corresponde a un Trauma Relacional Temprano; entendido como un derivado de repetidas experiencias de carácter traumático ocurridas durante los primeros años de vida que involucran a las principales



*figuras de apego, se encuentra en el centro de la organización de la personalidad de distintos trastornos psicopatológicos”.*

*Ana Patricia Neicul Ñancucheo: [...] La desaparición y muerte de su padre, marcan y originan inevitablemente daños irreversibles en su estructura de personalidad, prevalecen sentimientos de indefensión presentes en su desarrollo, acentuados desde la adolescencia, originados por la usencia de sus progenitores, sentimientos tan profundos, que, ante diferentes dificultades a lo largo de su vida. Al día de hoy doña Ana Neicul se encuentra en un proceso de duelo suspendido (duelo patológico) dada la experiencia traumática desde su niñez, lo que generan la aparición de sentimientos de frustración, angustia y desamparo, generando una base traumática en el tiempo. Pero si es importante destacar que, a pesar de este impacto a corta edad, sobresalen recursos propios y estrategias de afrontamiento que la muestran como una mujer resiliente, legando sacar sus estudios superiores con mucho esfuerzo. [...] producto de los eventos descritos el paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT, de curso crónico, lo que en términos específicos corresponde a un Trauma Relacional Temprano; entendido como un derivado de repetidas experiencias de carácter traumático ocurridas durante los primeros años de vida que involucran a las principales figuras de apego, se encuentra en el centro de la organización de la personalidad de distintos trastornos psicopatológicos. Además, se agrega la presencia de un Duelo traumático; que se caracteriza porque el familiar que lo sufre, se expone a un dolor psíquico intenso, que lo afecta en todos los ámbitos de su vida y que lo petrifica en un estado de shock interminable.”*

*Marisa Dorama Neicil Ñancucheo: “[...]Al día de hoy doña Marisa Neicul se encuentra en un proceso de duelo suspendido (duelo patológico) dada la experiencia traumática desde su niñez, lo que generan la aparición de sentimientos de frustración, angustia y desamparo, generando una base traumática en el tiempo. [...] producto de los eventos descritos el paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT, de curso crónico, lo que en términos específicos corresponde a un Trauma Relacional Temprano entendido como un derivado de repetidas experiencias de carácter traumático ocurridas durante los primeros años de vida que involucran*



*a las principales figuras de apego, se encuentra en el centro de la organización de la personalidad de distintos trastornos psico patológicos. Además, se agrega la presencia de un Duelo traumático; que se caracteriza porque el familiar que lo sufre, se expone a un dolor psíquico intenso, que lo afecta en todos los ámbitos de su vida y que lo petrifica en un estado de shock interminable”.*

**NOVENO:** El *daño moral* es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra, y entraña una naturaleza de índole eminentemente subjetiva. La acreditación de la calidad de víctimas de los demandantes por tratarse de la esposa e hijos de una víctima principal (detenido desaparecido) de violaciones de sus derechos humanos por agentes del Estado, forzoso es concluir que se ha producido dicho perjuicio y que debe ser reparado.

Así, por otra parte, con el análisis de los medios de prueba valorados en los fundamentos anteriores permiten dar por acreditada la existencia y entidad del daño moral por tratarse de los derechos de personas en el contexto institucional de la época, a manos de agentes del Estado, lo cual ha producido sufrimiento a los actores por la detención y desaparición de cónyuge y padre, lo que debe ser indemnizado, habida consideración de los antecedentes probatorios aportados por dicha parte sobre el particular, en especial, los informes psicológicos ya indicados con precedencia.

En consecuencia, se le otorgará prudencialmente las siguientes sumas:

- 1.- A doña Ángela Ñancucheo Ancapichun la suma de cuarenta millones de pesos.
- 2.- A Carlos Neicul Ñancucheo la suma de veinte millones de pesos.
- 3.- A Elisa Neicul Ñancucheo la suma de diez millones de pesos.
- 4.- A Ana Patricia Neicul Ñancucheo la suma de quince millones de pesos.
- 5.- A Marisa Dorama Neicul Ñancucheo la suma de quince millones de pesos

**DÉCIMO:** Que la demás prueba rendida en nada altera las conclusiones a que se ha arribado con precedencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH

artículos 5º, 6º y 38 de la Constitución Política de la República; los artículos 1.1., y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1698 del Código Civil, 144, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.- SE RECHAZAN** las excepciones perentorias de reparación y de prescripción extintiva de la acción opuesta por la demandada.

**II.- SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta al folio 1 en contra del **Fisco de Chile**, representado por el abogado procurador fiscal don Natalio Vodanovic Schnake, y, en consecuencia, se condena al **Fisco de Chile** a pagar las siguientes sumas de dinero: \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a doña **Ángela Ñancucneo Ancapichun**; \$20.000.000 (veinte millones de pesos) a don **Carlos Orlando Neicul Ñancucneo**; \$10.000.000 (diez millones de pesos) a doña **Elisa Margont Neicul Ñancucneo**; \$15.000.000 (quince millones de pesos) a doña **Ana Patricia Neicul Ñancucneo**; y \$ 15.000.000 (quince millones de pesos) a doña **Marisa Dorama Neicul Ñancucneo**.

**III.-** Las cantidades ordenadas pagar a cada uno de ellos se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se constituya en mora en el pago de la suma fijada en la sentencia.

**IV.-** No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese por cédula y consúltese si no se apelare.

**Rol C-1.043-2023.-**

**Redacción de don EDINSON LARA AGUAYO, juez titular;**  
**autoriza don David Silva Estrada, secretario titular.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, se incluyó en el estado diario la sentencia precedente. Valdivia, a veinticinco de noviembre del año dos mil veinticuatro.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH



**Edinson Antonio Lara Aguayo**

Juez

PJUD

Veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro  
11:48 UTC-3



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BSNEXRVTRLH